

La recogida separada y la tasa de residuos: un reto que exige repensar el modelo desde su raíz

Fundación Fórum Ambiental

Durante la última década, la política de residuos en España ha estado marcada por un consenso ampliamente compartido: la mejora de la recogida separada como instrumento clave para avanzar hacia los objetivos europeos de preparación para la reutilización y reciclaje. Este enfoque ha orientado tanto las decisiones normativas como las inversiones públicas y las estrategias locales.

Sin embargo, la experiencia acumulada por las administraciones y los datos disponibles invitan hoy a una reflexión más profunda. Desde la Fundación Fórum Ambiental, hemos abordado este análisis en el documento de análisis *“La recogida separada y la tasa de residuos municipales: un reto excesivo para los ayuntamientos”*, con el objetivo de contribuir a un debate necesario sobre la sostenibilidad real del modelo actual.

Las conclusiones son claras: los niveles de recogida separada en España siguen siendo insuficientes tanto en términos cuantitativos como cualitativos si se comparan con los objetivos normativos. Esta situación no responde únicamente a déficits operativos, sino a un problema estructural más amplio, relacionado con el diseño del sistema y el reparto de responsabilidades entre los distintos actores implicados.

En particular, la mejora de los resultados depende en gran medida de las grandes ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población. Esto introduce una desigualdad territorial evidente y evidencia que no todos los municipios cuentan con los mismos recursos ni capacidades para afrontar este desafío. Además, los sistemas de recogida separada de alta eficiencia,

si bien han mostrado potencial en determinados contextos, también han generado rechazo social, incrementos de costes y, en algunos casos, desgaste político para los gobiernos locales.

Este último aspecto no es menor. La gestión de los residuos se ha convertido en un ámbito de creciente sensibilidad social. La implantación de nuevos sistemas, el endurecimiento de las exigencias normativas y, especialmente, el incremento de las tasas municipales ha situado esta cuestión en el centro del debate público local. Los ayuntamientos se enfrentan así a una ecuación compleja: cumplir objetivos cada vez más exigentes sin erosionar la confianza de la ciudadanía.

El documento pone de manifiesto que esta tensión tiene una base económica clara. Los costes del sistema de gestión de residuos no han dejado de crecer, impulsados por la necesidad de nuevas infraestructuras, el encarecimiento de los tratamientos y la aplicación de instrumentos fiscales como el impuesto sobre el depósito en vertedero y la incineración. Como consecuencia, las entidades locales se ven obligadas a incrementar las tasas para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio, tal y como exige la normativa.

Sin embargo, este incremento de la presión fiscal sobre la ciudadanía se produce en un contexto socioeconómico complejo, caracterizado por la inflación, las dificultades de acceso a la vivienda y la incertidumbre laboral. No resulta sorprendente, por tanto, que surjan resistencias y que la gestión de los residuos se perciba, en ocasiones, como una carga adicional difícil de justificar.

A esta situación se suma un elemento clave que, a nuestro juicio, debe situarse en el centro del debate: el actual desequilibrio en el reparto de costes y responsabilidades dentro del sistema. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) no están asumiendo plenamente el coste de la gestión de los residuos derivados de sus productos, especialmente en aquellos casos en los que estos no se recogen de forma separada. Esta circunstancia desplaza una parte significativa del

esfuerzo económico hacia los ayuntamientos y, en última instancia, hacia los ciudadanos.

Este desajuste no solo cuestiona la equidad del sistema, sino que también limita su eficacia. Si los productores no internalizan los costes reales de la gestión de sus productos al final de su vida útil, los incentivos para el ecodiseño, la prevención de residuos y la mejora de la reciclabilidad se reducen considerablemente. En consecuencia, el sistema se ve abocado a actuar sobre los efectos –la recogida y el tratamiento– en lugar de sobre las causas.

Desde la Fundación Fórum Ambiental consideramos que este enfoque debe ser revisado. La transición hacia una economía circular efectiva requiere un modelo basado en la corresponsabilidad real de todos los actores implicados. En este sentido, el análisis plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema de financiación más equilibrado, que distribuya los costes entre productores, usuarios y contribuyentes de manera más justa. La propuesta de reparto en tercios constituye un punto de partida para este debate: un tercio a cargo de los productores a través de los SCRAP, otro tercio asumido por los usuarios mediante la tasa municipal y el tercio restante financiado a través de impuestos generales, más progresivos. Este enfoque no solo responde a criterios de equidad, sino que también puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema al alinear mejor los incentivos económicos.

En paralelo, resulta necesario redefinir el papel de las entidades locales. Los ayuntamientos deben seguir desempeñando un papel fundamental en la gestión de los residuos, pero es imprescindible ajustar sus funciones a aquellas áreas donde su intervención resulta más eficaz. En este sentido, la recogida separada de biorresiduos se configura como un ámbito prioritario, con un alto potencial de mejora y un impacto directo en la reducción de la fracción resto.

Por su parte, las administraciones autonómicas, estatales y europeas tienen un papel decisivo en la creación de un entorno favorable para la transición. Es imprescindible avanzar en la consolidación de un mercado de materias

primas secundarias que reconozca el valor de los materiales reciclados, así como en la implantación de políticas que eviten la competencia desleal de materias primas vírgenes a bajo coste. Asimismo, la estabilidad normativa, la simplificación administrativa y el impulso a la innovación son condiciones necesarias para atraer inversiones y acelerar el cambio de modelo.

No debe olvidarse, además, la dimensión social de esta transición. La aceptación ciudadana es un elemento clave para el éxito de cualquier política pública en materia de residuos. La experiencia demuestra que las medidas percibidas como injustas o desproporcionadas generan rechazo y pueden comprometer su viabilidad. Por ello, la transparencia, la comunicación y la pedagogía deben acompañar cualquier proceso de transformación.

En definitiva, nuestro documento plantea una cuestión de fondo: ¿es sostenible seguir apoyando la transición hacia la economía circular sobre un modelo que recae de forma tan intensa en los ayuntamientos? Nuestra conclusión es que no.

La recogida separada seguirá siendo una herramienta esencial, pero no puede continuar siendo el eje exclusivo de la política de residuos. Es necesario avanzar hacia un enfoque sistémico, que actúe sobre toda la cadena de valor, desde el diseño de los productos hasta la gestión final de los residuos.

Solo a través de un reparto más equilibrado de responsabilidades, una financiación más justa y una cooperación efectiva entre todos los actores será posible construir un modelo de gestión de residuos que sea, al mismo tiempo, ambientalmente eficaz, económicamente viable y socialmente aceptable.

La economía circular no empieza en el contenedor. Empieza mucho antes. Y es ahí donde debemos situar el centro de la acción.